

Los estudiantes talentosos de arte iban en tropel a París; los de medicina a Viena; y los graduados en ciencias a las grandes universidades británicas y alemanas. Después de 1933, gracias a Adolf Hitler, se revirtió la tendencia. Conspicuos científicos, músicos y médicos judíos se vieron forzados a abandonar Alemania y, después de 1939, todo el continente europeo. La mayoría de los exiliados del nazismo y, en menor número, los del fascismo italiano eran judíos. Pero una cantidad apreciable no eran más que científicos, artistas y profesionales que se negaron a vivir en el fascismo y pudieron, con cierto sacrificio económico, dejar sus países gobernados por dictaduras.

La guerra civil española de 1936 a 1939 provocó la diáspora a Gran Bretaña y las Américas de muchos intelectuales y profesionales de renombre. Lo mismo que en la primavera de 1940, una gran cantidad de intelectuales holandeses, belgas y franceses huyó también a Gran Bretaña y las Américas. La vida cultural del Nuevo Mundo se enriqueció inmensamente con los aportes de esos exiliados europeos. Las universidades de América latina, la vida literaria, los departamentos de literatura española y alemana de las universidades de Estados Unidos, las orquestas sinfónicas, las facultades de ciencias, los grupos de actores de Broadway y Hollywood, las galerías de arte y los museos, todos ellos recibieron el aporte permanente del talento europeo, gentileza de los señores Hitler, Mussolini y Franco. Desde 1940, en todas las cuestiones artísticas y científicas, las culturas europea y americana se convirtieron en cultura *occidental*.

CAPÍTULO 7

DEPRESIÓN Y CONFRONTACIÓN IDEOLÓGICA, 1930-1939

Durante los años veinte, los europeos estaban preocupados, sobre todo, por las cuestiones domésticas, la recuperación de cada uno de sus países o regiones de la devastación y el disloque económico provocados por la Gran Guerra. Las élites conservadoras de los países democráticos eran decididamente anticomunistas y los reducidos —pero militantes— comunistas miraban a la Unión Soviética en busca del liderazgo de la postergada si bien todavía «inevitable» revolución mundial. Sin embargo, los pueblos en general no estaban involucrados en batallas ideológicas. En lo que a los asuntos internacionales se refería, sus esperanzas estaban puestas en que la Liga de las Naciones ofreciera un fórum para dar soluciones negociadas a las disputas territoriales. Se esperaba también la reintegración de Alemania y la Unión Soviética al concierto de las naciones y que se hicieran progresos en el desarme internacional.

Pero en octubre de 1929 se produjo el derrumbe de la Bolsa en Estados Unidos, derrumbe que fue seguido por la Depresión más profunda sufrida por la era capitalista moderna. El surgimiento del nazismo en Alemania iba a destruir las esperanzas de cooperación internacional y a polarizar al mundo europeo alrededor de las alternativas ideológicas del fascismo, el comunismo y la democracia.

Para hablar brevemente de la Depresión: ciclos de auge y derrumbe en la Bolsa, quiebras bancarias, bancarrotas en la agricultura y las empresas, más un consecuente desempleo en

gran escala no eran desde luego fenómenos desconocidos. Pero la amenaza de parálisis nunca había sido tan grande y la Depresión afectó de manera más crítica a los países industriales avanzados. En el momento de mayor gravedad, aproximadamente entre 1931 y 1933, un total de un tercio de la población en edad de trabajar estaba desempleada en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Por añadidura, el aspecto puramente financiero de la Depresión estaba muy exacerbado por el problema nunca resuelto de las deudas de Alemania con los aliados por indemnizaciones de guerra y por las deudas de los aliados con Estados Unidos. En gran parte por iniciativa de Estados Unidos, las indemnizaciones (pero no las deudas de los aliados) habían sido reducidas dos veces, en 1924 y 1929. De cualquier modo, la Depresión suspendió por completo el pago de las indemnizaciones y de las deudas de los aliados. Los gobiernos capitalistas de los tres países más industrializados trataron en primer lugar de remediar la crisis con la deflación: disminuyeron los gastos estatales, redujeron los salarios laborales y los de los empleados de cuello blanco, mantuvieron altas tasas de interés para defender a toda costa los valores internacionales de cambio de sus monedas. La idea era que la inversión y la capacidad de consumo no podrían ser restablecidas, a menos que los pueblos recuperaran la confianza en el valor de su dinero. Eso era, y siempre es, bastante cierto para aquellos que tienen dinero. Pero el problema de 1930 era que el flujo circular de los ingresos salariales y el consumo se había reducido de manera drástica. La mayoría de la gente tenía muy poco dinero y temía gastar el poco que tenía.

Si se habla en general, la deflación es muy conveniente para los acreedores y muy dura para aquellos que dependen por completo de su salario mensual. Pero en 1930, los países industriales más avanzados tenían gobiernos más receptivos a los deseos de la clase acomodada que a los problemas de los asalariados, empleados o desempleados. Todos practicaban la ortodoxia financiera. Los británicos y estadounidenses porque consideraban que las suyas eran las monedas del comercio mundial; los franceses porque ya habían sufrido una grave devaluación a principios de los años veinte; los alemanes porque la experiencia de la hiperinflación de 1922-1923 había vacunado a todas las

clases contra el abuso de la emisión de billetes como solución a los problemas monetarios.

Sin embargo, la deflación no era la única manera de reaccionar ante el pavoroso decrecimiento de la actividad económica. Había una política alternativa: la propuesta por el economista británico John Maynard Keynes, que había sido una de las primeras personas en criticar la insensatez económica del Tratado de Versalles. Keynes aceptaba la secuencia normal de expansiones y contracciones cíclicas en toda actividad económica. Pero abogaba por las inversiones gubernamentales en obras públicas como un medio de «cebar la bomba» en períodos de contracción. Con ese método, los períodos de depresión podrían acortarse. Una de las mayores virtudes de esa política era que el gobierno podría mejorar las infraestructuras y proveer de servicios que el sector privado no había desarrollado o no consideraba bastante lucrativos.

Todo eso podría muy bien provocar una inflación moderada, pero sólo poniendo dinero en circulación y dándole al pueblo trabajos útiles podría recuperarse de verdad la confianza. Después se recobrarían la producción y el consumo general. En realidad, una inflación moderada de un pequeño porcentaje de puntos por año tiende a estimular la inversión porque, si la gente sabe que sus deudas de intereses e hipotecas serán menores cuando las pague al cabo de los años, estará mejor dispuesta a arriesgar la inversión original en una casa, granja o empresa.

El concepto de Keynes de cebar la bomba fue aplicado hacia 1932 por el gobierno socialdemócrata de Suecia. Con el New Deal se aplicó en Estados Unidos hacia 1933. Gran Bretaña aumentó la ayuda al desempleo y mejoró algunos servicios sociales, pero no adoptó la verdadera política de Keynes de cebar la bomba. Los países escandinavos, Gran Bretaña y Estados Unidos abandonaron el patrón oro y devaluaron sus monedas como una forma de aumentar sus exportaciones, al bajar automáticamente los precios en el mercado internacional (o en lo que quedaba de él).

Francia, que no había sido tan golpeada por el desempleo como los países más industrializados, pensó que merecía la pena importar oro y disfrutar del singular placer (vanidad inútil en esas circunstancias) de contar con una de las monedas más

«fuertes» del mundo. La deflación significó estancamiento en el interior y dañó también las economías de sus pequeños vecinos Bélgica y Holanda. Perjudicó asimismo a los Estados que eran sus clientes —la Pequeña Entente y Polonia—, cuya salud económica dependía de créditos franceses y de sus exportaciones a Francia. En Alemania, el gobierno financieramente ortodoxo de Brüning mantuvo su política deflacionaria, fomentando así sin proponérselo el fuerte desempleo y el bajo gasto de los consumidores.

El desempleo alemán, el estancamiento francés, la timorata política británica de inversiones públicas y, en Escandinavia y Estados Unidos, la necesidad de déficit financiero para dar lugar a una recuperación parcial, sirvieron más bien para minar la confianza de todas las clases sociales en la eficacia del capitalismo.

Desde el punto de vista de las clases gobernantes occidentales, el desafío soviético era el más preocupante. Entre 1921 y 1928 había recuperado los niveles anteriores a 1914. Con la Nueva Política Económica, la agricultura rusa y ucraniana empezó el proceso de mecanización. Lo cierto es que, a mediados de los años veinte, los campesinos rusos conocían más el nombre de Henry Ford (fabricante de automóviles y camiones) y el de International Harvester (fabricante de tractores) que los nombres de los jerarcas soviéticos. Las instituciones militares alemanas y soviéticas cooperaban entre sí, según el tratado firmado por ambos gobiernos en 1922. Ingenieros europeos y estadounidenses fueron contratados para supervisar importantes proyectos de infraestructura. Los jefes económicos soviéticos —Mikoyán, Orjonkidze, Kaganóvich, Bujarin y Stalin— eran todos entusiastas de la tecnología de Estados Unidos y de su eficiencia (a pesar de que el reconocimiento diplomático de Estados Unidos no se produjo hasta 1933).¹

Después de la muerte de Lenin —en enero de 1924—, las cuestiones económicas se entrelazaron con las luchas internas del partido por el futuro liderazgo. En 1928, Stalin había surgido

1. Hans Rogger, «Americanism and the Development of Russia», y Kendall E. Bales, «Ideology and American Technology in the USSR, 1917-1941», ambos en *Comparative Studies in Society and History*, 1981.

como jefe indiscutible. Decidió terminar con la NEP (Nueva Política Económica) e iniciar una serie de «planes quinquenales» para industrializar a la Unión Soviética y colectivizar la agricultura. En 1933, mientras el mundo capitalista estaba atascado en la peor Depresión hasta entonces conocida, Stalin anunció que el primer plan quinquenal se había cumplido en cuatro años. Apuntó un tremendo crecimiento en la producción de carbón y acero, en la extensión de la red ferroviaria y en el aumento del número de vagones de mercancías, en la construcción de fábricas de todo tipo, en la producción de energía eléctrica y en las cosechas de las granjas, colectivizadas en un 90 % entre 1929 y 1933. Llevó a cierta cantidad de ingenieros extranjeros a juicio por presuntos actos de sabotaje. Hubo informes no oficiales sobre resistencia masiva a la colectivización y sobre deportaciones masivas de campesinos a Siberia.

Para los observadores del exterior, la Unión Soviética era una mezcla inextricable y fascinante de entusiasmo revolucionario, política dogmática, cultura experimental, logros industriales ineficientes —pero impresionantes—, movilidad social ascendente para los inteligentes y ambiciosos, oportunidades crecientes para las mujeres y las nacionalidades no rusas, disciplina cruel y policía omnipresente. Al mismo tiempo, en cuanto al conocimiento real de lo que ocurría a diario, la sociedad era mucho más cerrada que la del imperio zarista o que las de cualquier otra dictadura europea contemporánea. Hacia 1930, por ejemplo, en Italia, Polonia y en las dictaduras balcánicas y bálticas era peligroso divulgar verdades desfavorables; los corresponsales extranjeros solían ser amenazados y, en algunas ocasiones, expulsados. Pero todavía era posible viajar libremente por el país, observar acontecimientos y entrevistar a personalidades políticas de la oposición.

En cambio en la Rusia soviética los corresponsales tenían que pedir permiso para salir de Moscú o Leningrado, vivir en hoteles especiales, ser acompañados por «intérpretes» y policías vestidos de civil que los seguían como sombras (mientras, a la vez, ponían el ojo en los intérpretes). Quienes no pertenecían a los círculos de gobierno temían tener algún tipo de contacto personal con extranjeros, para no ser acusados de espionaje o de «calumniadores» contra el Estado soviético. Las informaciones

de juicios por sabotaje debían ser revisadas por los censores y reflejar el punto de vista oficial. Las informaciones sobre la resistencia y el hambre en Ucrania eran automáticamente condenadas como calumnias. En vista de que a los periodistas occidentales no se les permitía viajar por las zonas recién colectivizadas, sus comentarios sobre la guerra bolchevique contra los kulaks (campesinos prósperos) tenían que basarse en las historias contadas por los refugiados que escapaban a Rumanía o Polonia.

Sin embargo, a pesar de todas sus características contradictorias, el período que va desde 1928 —cuando Stalin consolidó su poder— hasta 1936 —cuando escenificó el primero de los juicios por traición contra la anterior generación de líderes revolucionarios— fue un período de grandes logros en las tareas básicas de la industrialización. Hay numerosos testimonios concordantes en las memorias de jóvenes obreros, estudiantes y profesionales izquierdistas (no necesariamente comunistas), que fueron desde Europa y las Américas para ayudar a construir el socialismo durante los planes quinquenales.

Esos voluntarios extranjeros fueron arrastrados por el entusiasmo de los obreros locales por «sobrecumplir» los planes de producción del partido de vanguardia y su gran líder, el camarada Stalin. Acerías, edificios de apartamentos, talleres de reparación de maquinaria, locomotoras, material rodante, diques con instalación de turbinas hidráulicas daban la sensación de logros tangibles. Aquellos que pertenecían a las clases medias de las sociedades occidentales se quedaban profundamente impresionados por las escuelas y hospitales nuevos, por la alta proporción de médicas (sin lugar a dudas un fenómeno raro en los países occidentales de aquellos tiempos) y por la cantidad de puestos importantes ocupados por baxkires, tártaros y miembros de nacionalidades minoritarias de los cuales no habían oído hablar nunca.

En las zonas urbanas alejadas de Moscú y Leningrado, la policía y la burocracia no eran tan omnipresentes como en las grandes capitales y el contacto humano era más informal. Entre los voluntarios estadounidenses que trabajaban en el centro de producción de Magnitogorsk («la montaña de hierro») en los Urales estaba John Scott, un hijo izquierdista del economista radical estadounidense Scott Nearing. Así es como impresionó al principio a su futura mujer, Masha:

El primer americano que jamás había visto parecía un niño sin hogar. Vi en él el producto de la opresión capitalista. Vi con los ojos de la mente su triste infancia; imaginé las largas horas de trabajo inhumano, que había estado obligado a cumplir en alguna fábrica capitalista mientras todavía era un niño; me imaginé el vergonzoso jornal que recibía, apenas suficiente para comprar el pan necesario que le permitiera seguir trabajando al día siguiente; imaginé el temor de perder incluso esa pitanza y de ser echado a la calle desempleado, en el caso de que no fuera capaz de cumplir sus tareas para satisfacción y provecho de sus parasitarios jefes.²

En la década posterior a la extinción de la Unión Soviética, semejante visión puede parecer increíble, pero en aquellos tiempos no lo era en absoluto. Alemania y Estados Unidos estaban sufriendo un desempleo masivo, a la vez que había una «superproducción» de bienes y servicios que millones de sus ciudadanos no estaban en condiciones de comprar. El gobierno soviético casi no necesitaba exagerar la verdad en su incesante propaganda sobre el desempleo occidental. Sus mismos ciudadanos, excepto un puñado de diplomáticos y representantes comerciales, no estaban autorizados para viajar al exterior. La presencia de voluntarios extranjeros parecía confirmar las declaraciones de las autoridades soviéticas.

Entretanto su país clamaba por la construcción de un futuro mejor para toda la humanidad, sin desempleo, sin discriminaciones raciales ni de sexo. Estaban obligados a llevar consigo pasaportes internos y a registrarse ante las comisarías cada vez que se mudaban de casa o cambiaban de empleo. Pero se presumía que un gobierno sabio estaba dando lo mejor de sí para distribuir de manera racional los recursos en beneficio de todos. El nacionalismo agresivo parecía cosa del pasado. Los etnólogos recogían la música y las danzas de más de cien nacionalidades; los lingüistas preparaban diccionarios de lo que, hasta los años veinte, sólo habían sido lenguas habladas. No había pogromos ni guerras interétnicas. Europeos occidentales, estadounidenses, canadienses, rusos, ucranianos y pue-

2. John Scott, *Behind the Urals*, Indiana University Press, 1989, p. 119.

blos asiáticos compartían el trabajo, las esperanzas y los genes en la Unión Soviética.

Durante esos mismos años de los iniciales triunfos agrícolas e industriales soviéticos —alrededor de 1928-1933—, la República de Weimar era incapaz de arreglárselas con la Depresión. Los socialdemócratas y el Partido de Centro —los únicos comprometidos de verdad con un gobierno democrático en manos civiles— no hacían más que tropezar una y otra vez, sin liderazgo indiscutido ni programas claros. Al mismo tiempo, el Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler —que a principios de los años veinte no parecía más que un puñado de pendencieros callejeros— surgió de pronto en las elecciones de septiembre de 1930 como el segundo partido del Reichstag, con 107 diputados (contra 143 de los socialdemócratas).

La vida política de la época estaba plagada de milicias políticas privadas: los *Stahlhelm*, «cascos de acero», patrocinados por industriales reaccionarios; los *Saalschutz Abteilung*, la Sección de Protección de Mítines de Hitler, dirigida por uno de sus más tempranos y vulgares seguidores mercenarios, Ernst Röhm; los *Schutzstaffel* —los camisas negras—, «Escuadras de Protección», dirigidas por Heinrich Himmler; los *Rot Kämpferbund*, la «Guardia Roja» del Partido Comunista; los *Reichsbanner*, milicia defensiva formada en su mayoría por socialdemócratas y un pequeño número de centristas.

Los nazis hacían su campaña sin ninguna visión racional ni revolucionaria del futuro de la humanidad que se pareciera a la que inspiraba a los comunistas. La suya era una concepción abiertamente nacionalista y racista —no la de un futuro mejor para la humanidad en general—, que pretendía conquistar y dominar Europa, con «mil años de Reich alemán». Sus oradores apelaban a una extraña combinación de odios e ideales. Eran antibolcheviques, anticapitalistas (retóricamente por lo menos), antifranceses, antisemitas, antidemocráticos, decididos a vengar las humillaciones del Tratado de Versalles. Prometían superar el estancamiento económico y el desempleo. Pero lo más importante para sus compatriotas —sobre todo para las mujeres, que parecían hipnotizadas por su oratoria— era que Hitler prometía la recuperación de los «valores» alemanes de una prístina y antigua cultura rural y artesana —destruida por la industria capita-

lista y la urbanización—, idealizada en el recuerdo como una cultura superior a la sucia cultura industrial.

Hitler era austríaco; amante de la mitología wagneriana y del drama musical; fracasado pintor de paisajes; testigo de los grandes avances conseguidos por los judíos emancipados de Austria a principios de siglo; ferviente admirador de Karl Lueger, popular, capaz y antisemita alcalde de Viena. Ni el antisemitismo personal de Hitler ni la importancia que adquirió el antisemitismo en la visión mundial del nazismo en su conjunto podrían entenderse sin hacer alusión a los estereotipos europeos sobre los judíos y al rápido cambio de situación de los judíos en el mundo germanoparlante, durante el período que va de 1890 a 1930 aproximadamente.

Hablaré primero de los estereotipos generales: los judíos observaban una religión emparentada, pero diferente, con la cristiana que predominaba en Europa. El judaísmo y la cristiandad compartían el monoteísmo y el Antiguo Testamento. Jesús mismo fue rabino pero, mientras los cristianos creían que era el Hijo de Dios, que había tomado forma humana y permitido que lo crucificaran para pagar los pecados de toda la humanidad, los judíos se negaron a reconocerlo como el Salvador y fueron de hecho corresponsables con el gobierno provincial romano de su arresto y crucifixión.

Los judíos tenían leyes dietéticas distintas, festividades y hábitos familiares distintos a los de sus vecinos. Durante la Edad Media era creencia general (sin pizca de evidencia) que mataban a los niños cristianos para utilizar su sangre en toda clase de ritos diabólicos. A fines del siglo XIX, casi cualquier europeo urbano que supiera leer y escribir rechazaba tales creencias que, en cambio, seguían vivas entre los campesinos y vecinos de los pueblos. Esas creencias fueron factor de instigación a los pogromos de Europa oriental ya bien entrado el siglo XX. Hasta la emancipación legal producida medio siglo después de la Revolución francesa, a los judíos les estuvo prohibido poseer tierras. Por lo tanto para la mayoría de la población eran conocidos como buhoneros y prestamistas, ocupaciones que daban la imagen añadida de ser gente «sin raíces» en quienes no se podía confiar (puesto que la mayoría de las poblaciones rurales desconfiaban del dinero y de aquellos que lo tocaban).

Volvamos a la experiencia específica de los alemanes: hasta 1871 Alemania estuvo dividida en docenas de pequeños Estados que, sin embargo, eran cultural y económicamente prósperos y estaban gobernados por familias reales con varios siglos de antigüedad. A los judíos no se les permitía asistir a las universidades ni pertenecer a los gremios artesanales o profesionales, que autorizaban casi toda la actividad económica. De ahí que se concentraran en pequeños negocios itinerantes. Un reducido, pero también muy culto, puñado de judíos financieros sirvieron como tesoreros en las casas de los príncipes alemanes y como administradores de los terratenientes, para quienes la actividad comercial era función que debía dejarse en manos de gente inferior. De modo que todas las clases alemanas miraban socialmente con desprecio a los judíos, pero les resultaban muy útiles como buhoneros, pequeños comerciantes o gerentes financieros y comerciales.

La emancipación legal de los judíos en el siglo XIX coincidió con la rápida urbanización e industrialización de Alemania. Los judíos se trasladaron en gran número a las ciudades industriales en expansión, donde ejercieron sus ocupaciones urbanas tradicionales con mucha energía y éxito. Los judíos tenían también una larga tradición de respeto por la filosofía y el estudio; un respeto cuyo principal desahogo eran los comentarios bíblicos y talmúdicos, la lingüística y los ejercicios lógicos. Con la emancipación se precipitaron a las universidades y se introdujeron en las profesiones liberales. Aunque constituían menos del 1 % de la población, después de 1890 parecieron de pronto inmensamente numerosos e influyentes en medicina, derecho, grandes empresas, periodismo, arte, música, teatro y en el nuevo arte de la cinematografía.

Además de las arriba mencionadas bases religiosas y económicas del antisemitismo, los nazis explotaron con mucha habilidad dos factores más. Adoptaron al pie de la letra la pseudobiología y la teoría de la supuesta superioridad racial aria, desarrollada a fines del siglo XIX, de la cual extrajeron la conclusión de que la sangre judía (y qué decir de la gitana o negra) «contaminaría» la sangre pura y sana del pueblo alemán. Por último explotaron el factor que siempre había estado presente en la violencia antisemita, un factor que podría ser etiquetado como

«odio sin riesgo». Los judíos eran siempre un grupo reducido y muy pocos de ellos servían como militares de carrera o policías. Y desde luego no tenían un Estado ni un ejército detrás. Por lo tanto era menos peligroso atacar al capitalismo judío que al capitalismo alemán o anglosajón; a los sindicalistas judíos que a los sindicalistas alemanes, etcétera.

A fines de 1930, mientras se profundizaba la Depresión, Hitler se empezó a mover rápida y confiadamente en demanda del poder. Aseguró a los capitalistas y banqueros más importantes que no tenía ninguna intención de socializar sus propiedades. Hizo una alianza electoral con los nacionalistas de Alfred Hugenberg, un acaudalado magnate de la prensa y productor cinematográfico. En las elecciones presidenciales de abril de 1932 ganó trece millones de votos contra el héroe de la guerra mariscal Hindenburg reelegido por diecinueve millones de votantes, los cuales esperaban que acabara a la vez con Hitler y los comunistas. Durante esa y otras campañas electorales nunca pretendió evitar la violencia sino, por el contrario, utilizar a su frenética catterva de camisas pardas para hacer añicos los escaparates de las tiendas judías y las cabezas de los obreros socialistas y comunistas. Cuando el canciller Brüning trató de desbandar a las pandillas armadas del partido, Hitler forzó al anciano presidente Hindenburg a rescindir la orden.

Brüning renunció antes de someterse a la intervención presidencial y, en las siguientes elecciones parlamentarias del 31 de julio de 1932, los nazis se convirtieron en el partido mayoritario de la cámara. Lograron el 37 % de los votos, el porcentaje más alto que recibieron nunca en una elección libre. Hitler no estuvo dispuesto a aceptar gabinetes de coalición —en los cuales él habría sido nombrado vicescanciller— de modo que el punto muerto parlamentario continuó y hubo que convocar nuevas elecciones en noviembre, en las que el voto nazi disminuyó hasta el 33 %.

Hitler, sus aliados nacionalistas y los industriales que lo apoyaban decidieron que tenía que llegar al poder constitucionalmente, antes de que sus votos se redujeran más aún. El 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg autorizó un gabinete nazi-nacionalista de coalición. El nuevo gobierno empezó por arrestar a los líderes socialistas y comunistas, e impulsó el ya existente

boicot nazi a las empresas de propiedad judía. Hitler anunció nuevas elecciones para el 5 de marzo que, públicamente, predijo serían las últimas en el futuro previsible. El 27 de febrero fue incendiado el Reichstag, un incendio políticamente conveniente, del cual se culparon mutuamente nazis y comunistas. Al parecer fue provocado en solitario por un débil mental holandés aunque el caso no ha sido nunca del todo aclarado.³

Redoblado el terror nazi callejero, el partido ganó las elecciones del 5 de marzo con el 44 % de los votos. Gracias a la ayuda de sus aliados nacionalistas fueron dueños de una escasa mayoría, pero Hitler se proponía actuar como un dictador, no como primer ministro, aunque fuera de una mayoría de coalición. En la dramática sesión parlamentaria del 23 de marzo —convocada en la Kroll Opera House en lugar del incendiado Reichstag, donde los pasillos del auditorio estaban flanqueados por tropas armadas de asalto—, los nazis presentaron una «Ley de Defensa del Pueblo y del Estado», que legalizó la dictadura de Hitler. Eran pocos los diputados socialistas y comunistas que todavía estaban en libertad o que se atrevieron a asistir a la sesión. Para el triunfo de Hitler fue vital el voto favorable de los diputados católicos y centristas. El Partido de Centro había mantenido su fuerza electoral y su oposición al paganismo y a la violencia nazi en todas las últimas elecciones. Pero en la atmósfera de emergencia que siguió al incendio del Reichstag y a las elecciones del 5 de marzo, sus líderes —después de consultar con el Vaticano— decidieron votar a favor de la Ley de Defensa del Pueblo y del Estado.

Durante el mes de abril los nazis promulgaron una serie de decretos que expulsaban a los judíos de los cuerpos de oficiales, los hospitales públicos, el funcionariado civil y la profesión docente. De forma intencionada y efectiva privaron a los judíos alemanes patriotas de cualquier ilusión de que sus servicios fueran aceptables en la «nueva Alemania». El 10 de mayo los libros de autores judíos, ya purgados de las bibliotecas universitarias y de las librerías, fueron quemados en ceremonias celebradas en las plazas de las ciudades de toda Alemania. El 30 de julio el Va-

3. Hans Mommsen, «Der Reichstagbrand und seine politischen Folgen», *Vierteljahre für Zeitgeschichte*, 1964, pp. 352-413.

ticano firmó un concordato, que rompió varios meses de boicot diplomático a los nazis que habían saludado la violencia gubernamental contra los judíos y contra toda la izquierda.⁴

En el curso de los dieciocho meses transcurridos entre enero de 1933 y junio de 1934, Hitler estableció su indiscutida dictadura. El partido había aceptado siempre el *Führerprinzip*, la máxima de que las decisiones de Hitler en cualquier terreno eran las decisiones finales que todos los miembros del partido tenían que llevar adelante con ciega lealtad. La Ley de Defensa del Pueblo y del Estado le garantizaba el poder legal para aplicar el *Führerprinzip* en la remodelación del funcionariado civil y la judicatura. Un gran porcentaje de abogados y jueces alemanes se afanaron por proporcionar las nuevas leyes deseadas por el Führer.

La acción que culminó sus exigencias de que el poder supremo estuviera en sus manos fue la sangrienta purga del 30 de junio de 1934. En esa ocasión se deshizo de Gregor Strasser, líder de los nazis con inclinaciones izquierdistas para quienes, dentro del nacionalsocialismo, el socialismo era importante; del general Kurt von Schleicher, el único oficial de alta graduación cuya habilidad política podría haberle estorbado para controlar al ejército; él, en persona, asesinó a Ernst Röhm, cuyas tropas de asalto —los camisas pardas— eran demasiado pendencieras para un gobierno que se afanaba por conseguir la lealtad de los alemanes amantes del orden. De ahí en adelante las SA estuvieron subordinadas a las SS, tropas de élite más disciplinadas, dirigidas por Heinrich Himmler.

La altisonante oratoria y la abierta brutalidad de Hitler fueron la causa de que muchos alemanes y extranjeros subestimaran su habilidad política. Una vez en el poder demostró gran capacidad para ganarse la voluntaria colaboración de la élite alemana y para mejorar la situación económica del país. El desempleo había llegado al 44 % en 1932 y descendió al 1 % hacia 1938. El milagro se produjo, en primer lugar, por los programas de obras públicas a gran escala: la construcción de una importante red nacional de carreteras; la inauguración de nuevos canales y puentes;

4. Karl Otmar Freiherr von Aretin, «Prälat Kaas, Franz von Papen, und das Reichskonkordat von 1933», *Vierteljahre für Zeitgeschichte*, 1966, pp. 252-279.

la reparación y ampliación de las líneas de transporte existentes; el programa de reforestación; y el acelerado programa de rearme, una vez denunciado el Tratado de Versalles.

En temas económicos era del todo pragmático. No tenía escrúpulos sobre déficits ni sobre inversiones privadas o públicas; empleaba ambas, y duplicó las rentas fiscales entre 1933 y 1937. Delegó la cuestión monetaria y las relaciones comerciales en el muy hábil banquero Hjalmar Schacht —que al principio no era nazi—, cuyo padre le había puesto el nombre de Horace Greeley en honor del editor estadounidense antiesclavista del siglo XIX. Schacht firmó numerosos acuerdos bilaterales con Latinoamérica y los países balcánicos, intercambiando sus materias primas (muy necesarias para la industria alemana) por artículos manufacturados y maquinaria. El constante ejemplo de la brutalidad nazi le ayudó desde luego en sus negociaciones con los aterrorizados interlocutores de los países balcánicos, pero también es un hecho que los socios más débiles encontraban mercados para sus exportaciones y que, tanto ellos como los nazis, obviaban los problemas monetarios recurriendo al trueque en la mayor parte de sus transacciones.

La ideología nazi era retóricamente anticapitalista, sin embargo Hitler combinaba una política de altos impuestos, incluidos los impuestos a los beneficios, con las constantes seguridades de que no iba a confiscar ninguna propiedad que no fuera judía; y con la concesión de largos y favorables contratos en el programa de rearme. El partido y la élite industrial hacían al mismo tiempo concienzudos esfuerzos para limar los sentimientos de aquellos que todavía soñaban con la restauración de un paraíso rural y de los que creían que la industrialización moderna era desalmada. Los nazis hablaban de la tecnología como manifestación de la cultura alemana, que estaba siendo desarrollada para mejorar la naturaleza estética de las obras públicas, el uso de los bosques, las vías de agua y los montes; hablaban de la salubridad, el aire libre, la buena iluminación de los espacios y edificios públicos. Y contrastaban esa cultura técnica alemana con la presunta codicia y la plaga urbana de la tecnología capitalista anglo-norteamericana.⁵

5. Jeffrey Hert, «The Engineer as Ideologue... in Weimar and Nazi Germany», y Anson G. Rabinbach, «The Aesthetics of Production in the Third Reich», *Journal of Contemporary History*, octubre, 1984, pp. 631-648, y octubre, 1976, pp. 43-74, respectivamente.

Los nazis eran también conscientes de que la clase obrera industrial había mantenido su lealtad a los partidos marxistas a través de todas las elecciones libres celebradas antes de 1933. Establecieron un Frente de Trabajo Nacional que, como muchas otras organizaciones juveniles y atléticas, combinaba la propaganda nazi y el chantaje con cierto atractivo para los intereses e ideales de la clase obrera. El Frente de Trabajo dirigía la competitividad productiva y concedía sustanciales premios a los ganadores. Sus clubs de atletismo tomaron posesión de compañías de autobuses y hoteles enteros para las vacaciones de sus miembros. Ampliaron en gran medida un plan de educación que formara trabajadores diestros, programa que había sido lanzado al final de los años veinte por los industriales conservadores.

A fines de 1935 el plan de rearme estaba escaso de obreros metalúrgicos y de la construcción bien entrenados; los graduados del programa de enseñanza del Frente de Trabajo ganaron pues, a la vez, en capacidad profesional y seguridad económica. El «calentamiento» de la economía industrial desde 1935 a 1939 provocó cierta inflación, de modo que los salarios reales no eran, en verdad, más altos de lo que lo habían sido antes de la Depresión. Pero todo el mundo tenía trabajo y era mucha la gente que comía mejor y estaba mejor alojada que durante la República de Weimar. Es por lo tanto muy comprensible que, aunque Hitler no convenciera nunca a más de un tercio de sus conciudadanos en elecciones libres, se convirtiera en un gobernante aceptable para un pueblo que recordaba la inflación de la posguerra y las tremendas tasas de desempleo de los años de la Depresión.⁶

Entre quienes subestimaron de mala manera la habilidad de Hitler y la rapidez con que se extendía su popularidad estaban los comunistas. Los teóricos marxistas, tanto de Moscú como de las democracias occidentales, creían que el fascismo —como fenómeno genérico de Italia, Alemania y los países centroeuropeos— representaba el último y desesperado esfuerzo del mundo capitalista para prevenir el triunfo inevitable del socialismo. Los comunistas recordaban con mucha amargura que el gobier-

6. T. W. Mason, «Labor in the Third Reich, 1933-1939», *Past and Present*, abril, 1966, pp. 112-141.

no provisional de la República de Weimar había utilizado a los *Freikorps*, de notoria mala reputación, para reprimir la revuelta de los espartaquistas y otras manifestaciones revolucionarias. La prensa comunista se refería a los socialdemócratas como «socialfascistas» y, en unas pocas ocasiones, los comunistas votaron con los nazis contra los socialdemócratas, convencidos de que la desestabilización de la República de Weimar redundaría en su beneficio, tal vez después de un breve período de los nazis en el poder.

Entre los años 1930 y 1933 la violencia nazi en las calles estuvo dirigida en especial contra los comunistas. Apenas tomaron el poder, los nazis arrestaron a cuanto militante comunista no había podido esconderse o marchar al extranjero a tiempo. Después de la primavera de 1933 los comunistas nunca pudieron volver a ejercer más que una resistencia simbólica contra el régimen nazi. Entretanto el gobierno soviético, comprometido con la política de Stalin de construir el socialismo en un país —aunque también ejerciera absoluto control sobre los pronunciamientos públicos de los partidos comunistas del mundo entero—, revisó su postura a la vista del desastre alemán.

Hacia mediados de 1935 los comunistas decidieron hacer una distinción entre las democracias capitalistas y las potencias fascistas. Con la intención de evitar que la barbarie fascista triunfara en toda Europa se urgió a los partidos comunistas a buscar alianzas con los partidos socialistas y con todos los elementos «progresistas» de los partidos políticos, sindicatos y élites intelectuales del mundo capitalista democrático. Ésa fue la política del Frente Popular, compuesto por fuerzas liberales, socialistas y comunistas, contra la amenaza del fascismo. En la política interna significaba apoyar programas reformistas como el aplicado por el New Deal estadounidense y los de la socialdemocracia sueca de la Vía Intermedia. En cuestiones internacionales significaba crear la «seguridad colectiva», sobre la base de alianzas militares defensivas entre la Unión Soviética y las democracias occidentales.

Las ideas del Frente Popular fueron muy bien recibidas por todos aquellos que, dentro de la izquierda democrática, se sentían capaces de dar crédito a la sinceridad de la nueva fachada comunista. Pero verdaderos Frentes Populares legislativos

sólo se lograron en España y Francia. Los años transcurridos entre 1936 y 1939 fueron testigos de los únicos esfuerzos serios por cubrir la brecha entre la izquierda democrática y los comunistas antes de la invasión a la Unión Soviética en la segunda guerra mundial.

España se había convertido en República en 1931 y, durante los primeros dos años, el nuevo gobierno estuvo formado por una coalición de clase media de republicanos y demócratas-socialistas (los comunistas formaban un partido minúsculo, en ese tiempo internamente dividido, y los anarquistas se oponían a la participación política en ningún régimen «burgués»). La coalición redactó una Constitución democrática, separó a la Iglesia del Estado, promulgó la primera ley de divorcio en España, garantizó la «gobernación autónoma» de Cataluña y los derechos de sufragio de las mujeres, mejoró los jornales rurales e inició la reforma agraria y los programas de construcción de escuelas.

Pero en el otoño de 1933 la coalición republicano-socialista se quebró y, cuando se presentaron como partidos separados en las elecciones de noviembre, fueron derrotados por una coalición de fuerzas conservadoras, que propuso revocar la mayoría de las leyes significativas aprobadas por las Cortes Constituyentes. Además, en vez de aceptar un régimen cuya política sólo pretendía una «monarquía sin rey», una parte considerable de la izquierda se vio envuelta en dos levantamientos simultáneos contra el entonces gobierno reaccionario (en el sentido literal de la palabra).

A principios de octubre de 1934, los mineros asturianos (tradicionalmente el sector más combativo del movimiento obrero) proclamaron la «comuna» con el apoyo de las organizaciones socialistas, comunistas, trotskistas y anarcosindicalistas locales. Uno de sus lemas era «Más vale Viena que Berlín», en clara alusión a los obreros socialistas vieneses que habían resistido al fascismo en febrero de 1934, mientras que los obreros alemanes habían permitido a los nazis llegar al poder en enero de 1933 sin ofrecer resistencia.

El segundo levantamiento, el de Barcelona, sólo duró un día, pero fue muy sintomático de la atmósfera política que se vivía. El movimiento proclamaba «una República catalana dentro de la República federal española». En la política española, «fe-

deral» era la palabra clave para una futura descentralización y una política social más de izquierda, que ningún gobierno reaccionario republicano iba a estar dispuesto siquiera a considerar ni la vigente Constitución unitaria podría autorizar.

Las dos revueltas indicaban el enorme temor al fascismo por parte de toda la izquierda y lo dispuesta que estaba a rebelarse contra el gobierno parlamentario con tal de no correr el riesgo del fascismo que, al fin y al cabo, ya había llegado al poder legalmente en Italia y Alemania. La revolución de Asturias fue reprimida con premeditada crueldad bajo la dirección del más joven de los generales españoles, el futuro dictador Francisco Franco. En Barcelona fueron arrestados los líderes del gobierno de la Generalitat y el estatuto de autonomía fue suspendido.

Fue así como, hacia 1935, escarmentados por su desdichada experiencia, los socialistas parlamentarios y los republicanos reformistas de España empezaron a elaborar una línea que coincidía con la nueva línea comunista: es decir, que sólo una alianza de la izquierda democrática, los comunistas y, de ser posible, los anarquistas podría evitar que la España republicana se deslizara hacia un fascismo de corte italiano o austríaco. Las elecciones de febrero de 1936 provocaron un ardiente enfrentamiento entre la coalición del Frente Popular y una alianza de los partidos conservadores, cuyos métodos propagandísticos y cuyo programa reflejaban con claridad los de Mussolini (incluidos los enormes retratos del «líder» y el saludo de las masas que gritaban: «Jefe, Jefe, Jefe», imitando el italiano «Duce, Duce, Duce»).

El Frente Popular (por el cual esa vez decidieron votar muchos anarquistas) ganó por una estrecha pero legalmente reconocida mayoría. Sin embargo, a causa de las incesantes manifestaciones de triunfo caracterizadas por lemas revolucionarios de un lado y conspiraciones militares ampliamente rumoreadas de otro, el nuevo gobierno republicano de izquierda apenas si podía funcionar. No obstante en la primavera de 1936 era evidente su intención de recuperar el programa reformista de los años 1931-1933. Entretanto, en mayo de 1936, el Frente Popular francés ganó las elecciones parlamentarias y comenzó a legislar sobre temas como las vacaciones pagadas de los trabajadores industriales y un programa de obras públicas de tipo keynesiano.

Los programas de reformas domésticas de los gobiernos, tanto el del Frente Popular francés como el del español, iban a ser superados por acontecimientos internacionales de los cuales no eran en absoluto responsables. El rearme había dejado la iniciativa en manos de los gobiernos fascistas. En 1935 Hitler empezó a reconstruir la armada alemana. Los británicos, con la esperanza de limitar el daño, firmaron un acuerdo naval con él, que anulaba los principios y las cláusulas específicas del convenio de 1919, haciendo que a los franceses se les estremecieran los huesos. Fue también en 1935 cuando Mussolini invadió, bombardeó y anexionó a Italia el único país independiente que quedaba en África, el reino de Etiopía. En marzo de 1936 Hitler envió tropas a las desmilitarizadas tierras del Rin. Tenían órdenes secretas de retirarse en caso de encontrar resistencia por parte de las tropas aliadas de ocupación, pero no tropezaron con resistencia alguna.

Hasta ese momento las potencias occidentales podían tranquilizarse con la idea de que Hitler no hacía más que destruir el Tratado de Versalles y de que se convertiría en un buen ciudadano tan pronto como se hubiera vengado de la humillación de 1919. En cuanto a Mussolini creó un exitoso antídoto contra el bolchevismo, y sus ambiciones sobre el Mediterráneo y el norte de África podrían ser acomodadas.

El estallido de la guerra civil española probó de modo decisivo que las dos potencias fascistas se proponían dominar Europa. El 18 de julio el grueso del ejército español intentó derribar al gobierno del Frente Popular con un «pronunciamiento» [en español en el original], la clase de revuelta militar que tantas veces había conducido en el pasado a cambios de gobierno sin derramamiento de sangre. Pero en esa ocasión, la combinación de algunas unidades leales y miles de miembros de los sindicatos socialistas y anarquistas evitaron el éxito de la revuelta en las principales ciudades.

El 20 de julio el fallido pronunciamiento se había convertido en una guerra civil que iba a durar treinta meses. De un lado estaban las unidades de élite del ejército, los industriales y financieros, la Iglesia, los monárquicos, el reducido partido fascista conocido como la Falange y los campesinos conservadores de la meseta castellana. Del otro, los partidos del Frente Popular, el grueso de la fuerza aérea y de la marina, los gobiernos autó-

nomos de Cataluña y las provincias vascas, la mayoría de los campesinos del sur de España y los anarquistas que, en esas circunstancias, decidieron que era necesaria la acción política para salvar al país del fascismo.

Ambos bandos apelaron de inmediato a sus amigos europeos en busca de ayuda militar y la ya internacionalizada guerra civil fue la prueba o, mejor dicho, la prueba fallida de la disposición de las potencias democráticas para resistir las agresiones del fascismo. El gobierno francés, encabezado por el intelectual socialista Léon Blum, envió de inmediato unas pocas docenas de antiguos aeroplanos todavía usables y permitió que voluntarios y camiones cargados con un misceláneo suministro de armas cruzaran los Pirineos. Esa permisividad hizo que el gobierno británico advirtiera a Francia contra medidas que podían provocar a Italia y Alemania. Lo cierto es que provocó la reacción amenazante de los conservadores franceses, muchos de los cuales eran profascistas y antisemitas (Blum era judío).

Entretanto la junta militar española había enviado emisarios a Italia y Alemania, cuyos dos dictadores decidieron mandar importantes cantidades de artillería, aviones de guerra, tanques y armas de pequeño calibre además de pilotos, especialistas en comunicaciones y consejeros militares. A principios de agosto, Francia tímidamente, Italia y Alemania con todo descaro habían empezado a mandar ayuda militar a los combatientes españoles. Sin embargo, atemorizada por las advertencias británicas y por la amenaza de disturbios internos, Francia cerró sus fronteras el 8 de agosto y asumió la iniciativa diplomática de crear un «Comité de No Intervención». A primeros de septiembre, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Portugal y la Unión Soviética se habían comprometido, «en principio», a no mandar suministros militares ni personal a ninguno de los dos bandos.

Una de las características novedosas de la diplomacia practicada por Hitler y Mussolini era la de contestar a los eufemismos codificados de la tradicionalmente mentalizada diplomacia británica con el mayor de los cinismos. A los dictadores no les costaba nada decir que, «en principio», estaban de acuerdo con algo. El Comité de No Intervención, presidido por los británicos, adoptó engorrosas normas cuya observancia permitió que pasaran meses antes de poder empezar a considerar siquiera

cualquier evidencia de intervención. Cuando el aterrizaje de aviones italianos en Marruecos y la descarga de cargueros alemanes en Lisboa eran noticias divulgadas por fuentes confiables de la prensa mundial, las potencias fascistas declaraban que las informaciones carecían de fundamento; haber aceptado la evidencia habría significado tachar a los gobiernos acusados de mentirosos. Lo cierto es que, desde julio de 1936 hasta que la completa victoria de Franco estuvo asegurada en marzo de 1939, las potencias fascistas no hicieron esfuerzo alguno por ocultar su continua —y decisiva— intervención. Su propósito original y constante era, en parte, el de intimidar a las potencias occidentales. Lograron muy bien su propósito combinando una abierta intervención, de la cual se jactaban sin tapujos, mientras ataban de pies y manos al Comité de No Intervención con embrollados procedimientos. En octubre de 1936 la Unión Soviética advirtió que no se sentía atada por ninguna restricción, puesto que otros las violaban. Ese mismo mes empezó a suministrar aviones, tanques, camiones, alimentos, medicinas y consejeros militares al gobierno de Francisco Largo Caballero (un socialista, antiguo yesero y dirigente sindical, el primer caso de un primer ministro europeo que procedía de la clase obrera industrial).

La guerra civil española fue titular de prensa durante más de dos años y medio. Casi todas las personas políticamente conscientes de Europa y del hemisferio occidental la interpretaron como el campo de batalla decisivo entre las fuerzas de la libertad política y el progreso económico, y las fuerzas de la reacción y los privilegios tradicionales. La defensa de la República implicaba, nada menos, que la defensa de toda la herencia emancipadora tanto de la Revolución francesa como de la Revolución rusa: libertad individual y constitucional; gobierno civil; reformas económicas en favor de los campesinos sin tierra y de los obreros industriales explotados; separación de la Iglesia y el Estado; educación pública universal; servicios médicos y sociales básicos; derechos lingüísticos y autonomía local para las minorías nacionalistas dentro de España; aceptación de los experimentos colectivizadores socialistas y anarquistas en la agricultura y la dirección de fábricas.

La causa de los «nacionales» [en español en el original] era nada menos que la defensa de toda la herencia conservadora

de Europa: inviolabilidad de la propiedad privada; orden público; relaciones sociales y económicas jerarquizadas entre las clases existentes (concebidas como de naturaleza divina otorgada por Dios a la sociedad humana); instituciones centralizadas, religiosas y políticamente autoritarias; rechazo del marxismo, el ateísmo, el sufragio universal, la soberanía parlamentaria y los partidos políticos.

Dentro de la misma España no fue sólo una guerra de intereses sino de ideales. Los republicanos liberales y los socialistas parlamentarios luchaban por que España llegara al rango de las democracias del siglo XX, por dotarla de instituciones como las de Francia, Escandinavia y el mundo anglosajón. Los socialistas de izquierda, los anarquistas y varios partidos marxistas —no estalinistas— luchaban por darle a España las instituciones revolucionarias que, con tanto fervor, imaginaban fueron las que había pretendido establecer la Revolución rusa original, deformada por la burocracia estalinista. Los nacionalistas vascos y catalanes luchaban por que España tuviera, no sólo un régimen civil democrático, sino un régimen que reconociera los derechos de las lenguas y culturas no castellanas.

En el bando del general Franco, los católicos luchaban por defender a su Iglesia contra los atropellos anticlericales y por mantener la educación y moral católicas. Los monárquicos alfonsinistas luchaban por la eventual restauración de una monarquía parlamentaria borbónica. Los carlistas luchaban por una monarquía más tradicionalista y autoritaria, como la que auspiciaba la rama carlista de la familia real. Los conservadores de clase media luchaban por preservar la creciente sociedad secular capitalista, a la cual veían como el medio más idóneo para mejorar la economía española y atenuar la lucha de clases. La Falange luchaba por establecer un Estado de corte fascista italiano, al cual veían como el mejor medio para combatir el peligro del marxismo materialista y ateo. El general Franco luchaba por recuperar la autoridad y el orden tradicionales. Y también —en un momento en que los anarquistas profanaban las iglesias— porque creía haber sido destinado para salvar a la España cristiana de las hordas ateas, masónicas y materialistas. Todas las guerras implican una mezcla de ideología e intereses específicos de poder. Pero en el caso de España, el poder relativo de las ideologías

políticas y de los ideales morales fue mucho mayor que en la mayoría de las guerras. De ahí el compromiso, el heroísmo, el sentido de «destino» universal, la capacidad de sacrificio personal y la crueldad con el enemigo. Los primeros meses de la guerra, en particular, estuvieron marcados por el terror revolucionario y contrarrevolucionario. En la zona del Frente Popular fueron asesinados curas y monjas por ser miembros de una Iglesia privilegiada, que había dominado la vida social y cultural de España durante siglos y que, casi siempre, había tomado partido por los ricos y poderosos en contra de los pobres y desposeídos. Terratenientes y empresarios fueron asesinados por quienes dependían económicamente de ellos, y pretendían vengar reales o supuestas vejaciones.

En la zona dominada por los generales Franco, Mola y Queipo de Llano, los maestros y médicos eran automáticamente considerados sospechosos de apoyar al Frente Popular y, muchos de ellos, fueron asesinados por esa única razón. En el sur y el oeste de España, tropas relativamente reducidas en número invadieron amplias zonas cuya población campesina se presumía —con fundamento— era hostil al levantamiento militar. Durante los años veinte el ejército había masacrado en Marruecos a los habitantes de pueblos moriscos rebeldes. En la España de la guerra civil, el ejército no tuvo ningún escrúpulo para ametrallar a campesinos armados con horquillas y mosquetes de caza. Tampoco los tuvo para ejecutar a trabajadores que tuvieran una magulladura sobre otra en el hombro, porque podrían ser consecuencia de haber hecho fuego con una escopeta.

Las noticias del terror desatado eran internacionalmente mucho más perjudiciales para la causa republicana que para la de los militares. El Frente Popular estaba por la libertad y la justicia social. Quienes lo apoyaban podían entender muy bien la confiscación de las propiedades de la Iglesia y el cierre de las escuelas religiosas, pero no el linchamiento de sacerdotes. Por añadidura, muchas de las víctimas acaudaladas eran bien conocidas en Francia o Gran Bretaña y tenían contactos familiares o de negocios en esos países; en cambio, los campesinos y los maestros de escuela ejecutados por los militares eran desconocidos fuera de sus pueblos nativos. Los hombres de prensa extranjeros podían informar libremente de lo que veían en la zona republicana, pero

la fuerte censura impuesta en la zona nacional impedía que trascendieran noticias de ese tipo.

De hecho, el número de víctimas en la zona militar fue mucho mayor que en la zona republicana. El gobierno republicano advertía por radio que no se les abrieran las puertas a extraños; permitió el refugio en embajadas y consulados de Madrid y Barcelona; concedió pasaportes y, en algunas ocasiones, brindó escolta policial a ciudadanos conservadores, que se sentían amenazados y querían emigrar. En la España nacional, la jefatura militar consideraba que no estaba haciendo más que depurar al país de la canalla. Ningún republicano pudo buscar refugio en consulados; a los soldados que estaban haciendo el servicio militar se los asignó a los pelotones que sacaban a los prisioneros republicanos de las cárceles para llevarlos a los campos de ejecución. En el bando republicano, el gobierno se avergonzaba del terror descontrolado; en el otro, la junta militar practicaba el terror abiertamente como medio «legítimo» para establecer el control.

El contenido ideológico de los programas de partido y el idealismo personal de los combatientes fueron, en gran parte, responsables del terror en los dos bandos durante los primeros meses de la guerra. Pero, a la larga, la conducta política en ambas zonas y el resultado de la guerra estuvieron determinados por factores internacionales. El papel desempeñado por la Unión Soviética y el Partido Comunista español fue decisivo para el desarrollo de los acontecimientos en la zona republicana. La guerra civil española parecía proporcionar la gran oportunidad de defender la seguridad colectiva y de frenar el avance del fascismo sin necesidad de llegar a una segunda guerra mundial. Los soviéticos, al mismo tiempo que participaban en el Comité de No Intervención, contrarrestaban la ayuda fascista al general Franco con su ayuda a la República y trataban, sin cesar, de formar una alianza defensiva contra las potencias fascistas a través de la diplomacia. La mayoría de la opinión pública de todos los países occidentales simpatizaba con la República, sobre todo desde que el terror anárquico terminó en noviembre de 1936 y cuando la defensa de Madrid probó la capacidad militar de los republicanos. Entre julio de 1936 y fines de 1938 unos cuarenta mil voluntarios llegados de toda Europa y las Américas, peque-

ños contingentes de Asia, África y Australia (además de cientos de enfermeras y médicos) sirvieron en las Brigadas Internacionales en defensa de la República.

El papel de los partidos comunistas fue vital. Sus miembros más jóvenes componían alrededor de la mitad de los voluntarios. Las organizaciones comunistas proporcionaban pasaportes y transporte para todos ellos fueran o no comunistas. Los contactos fraternales que mantenían con intelectuales democráticos —a través del Frente Popular— lograron que la prensa concediera un tratamiento favorable a la República y les permitió organizar mítines masivos en nombre del Frente Popular más que de la Tercera Internacional.

Desde septiembre de 1936 hasta el final de la guerra, la Unión Soviética fue la única potencia importante que envió ayuda militar, defendió los derechos legales de la República en los foros internacionales y llamó al pan «pan» y al vino «vino» cuando se hablaba de la ayuda ítalo-alemana-portuguesa a Franco. Los obreros soviéticos fundían candelabros y arrojaban las alhajas de la familia a los pots donde se recogía ayuda para la España republicana. Ésa fue una de las raras ocasiones en las que el gobierno soviético se sintió capaz de permitir la expresión espontánea de la opinión pública. Sin embargo la Unión Soviética de los años 1936-1938 fue también la tierra de las sangrientas purgas de Stalin: los juicios orquestados en los cuales docenas de líderes bolcheviques de toda la vida confesaban actos de presuntos sabotajes y conspiraciones para matar a Stalin; los años durante los cuales varios millones de personas firmaron confesiones falsas y fueron deportadas a campos de concentración del norte de Rusia y Siberia.

Junto con los consejeros militares llegó a Madrid, Valencia y Barcelona la policía secreta de Stalin para purgar la vida política española y catalana de todos los izquierdistas no estalinistas o antiestalinistas. Los sucesivos gobiernos del Frente Popular y de la Generalitat tuvieron que tolerar esa intromisión, que mezclaba constantemente el consejo práctico militar y político con las purgas sectarias. Las Brigadas Internacionales y el Partido Comunista español también se vieron obligados a aceptar la creciente ingerencia de los agentes estalinistas.

Dentro de España, el aumento del poder comunista estuvo

acompañado por el creciente derrotismo de la izquierda no comunista. En Londres, durante los farseantes procedimientos del Comité de No Intervención, los portavoces británicos y franceses lamentaban la excesiva influencia de los comunistas mientras se negaban a pedir cuentas a las potencias fascistas de los más de cien mil efectivos, uniformados y bien armados, que habían mandado para luchar al lado del general Franco. De modo que la «no intervención» unilateral hizo que la República dependiera por completo de la ayuda material soviética y puso al gobierno del Frente Popular ante una disyuntiva: aceptar la dominación estalinista o rendirse por falta de armas.

La guerra civil española demostró que, allí donde las ideologías están en cuestión, la derecha es mucho más capaz de unirse que la izquierda. Numerosos banqueros y empresarios británicos, franceses, belgas y suizos apoyaron al general Franco. Muchos de ellos no eran, en apariencia, fascistas ni militaristas. Pero en términos pragmáticos les parecía que los nacionales eran más capaces de hacer contratos viables. Y, en general, los empresarios prefieren gobiernos que mantienen el orden público, sin que les importen las barbaridades que puedan cometer. En la zona franquista había también divisiones internas entre facciones monárquicas, facciones falangistas y oficiales ambiciosos que pretendían brillar por cuenta propia. Pero no se permitió que ninguno de esos conflictos destruyera la unidad de la causa nacional, como ocurrió con las divisiones internas del Frente Popular, que tanto ayudaron a Franco en la aniquilación de la República.

La política de no intervención permitió que Hitler y Mussolini supusieran —con razón— que, mientras Francia y Gran Bretaña no se vieran directamente atacadas, harían cuanto estuviera en su poder para no entorpecer las ambiciones de los dos dictadores. La política seguida por las democracias occidentales desde 1935 a 1939 se ha conocido desde entonces con el nombre de «política de apaciguamiento». La diplomacia desplegada por esos países durante la guerra civil española es, tal vez, el ejemplo particular más notorio de la política así llamada. Estados Unidos había seguido el liderazgo anglo-francés en la cuestión española pero, a mediados de 1938, el presidente Roosevelt y en Gran Bretaña el disidente tory (conservador) Winston Churchill

lamentaban el apoyo a la política de no intervención y esperaban que la República española pudiera continuar la resistencia contra las fuerzas combinadas del general Franco, Italia y Alemania.

Otra prolongada crisis diplomática iba a proporcionar la última oportunidad para desarrollar una política colectiva de seguridad que salvara a Europa de una guerra generalizada. En marzo de 1938 Hitler amedrentó al último canciller de la Austria independiente, quien permitió que los nazis ocuparan el país sin ofrecer resistencia militar. Luego anunció que las terribles vejaciones que, supuestamente, estaba sufriendo la minoría alemana en Checoslovaquia debían terminar con la liberación de los Sudetes —zona del norte checoslovaco poblada en gran parte por alemanes— del dominio del Estado checoslovaco.

En ese momento Francia y la Unión Soviética que, cada una por su cuenta, habían firmado tratados de defensa mutua con Checoslovaquia anunciaron calladamente que harían honor a esos tratados si Checoslovaquia era atacada. Sin embargo, el primer ministro británico Neville Chamberlain rechazó explícitamente en el Parlamento brindar ayuda británica a Francia en el caso de que Alemania agrediera a Checoslovaquia.

Hitler no tardó en aprovechar la ocasión. Las elecciones municipales en las provincias de los Sudetes debían celebrarse el 22 de mayo. El 24 de abril el Partido Alemán de los Sudetes dirigido por Konrad Henlein —después de una visita muy bien publicitada de Henlein a Berlín— abrió su campaña con el anuncio del «Programa de Karlovy Vary», que exigía el completo autogobierno de la zona de los Sudetes. Los consejeros nazis orquestaron las manifestaciones callejeras y los chantajes, que habían caracterizado las elecciones de 1932 en la misma Alemania. El ejército alemán —por casualidad— hizo maniobras cerca de la frontera checoslovaca el día de las elecciones, maniobras a las cuales respondió el ejército checoslovaco con la movilización parcial. Llegados a ese punto, Chamberlain advirtió a Hitler que Gran Bretaña podría verse envuelta en el conflicto en caso de que hubiera guerra. Hitler le ordenó a Henlein que moderara su tono. De cualquier manera, para entonces, el partido de Henlein había reemplazado por completo a los demás partidos alemanes de los Sudetes, que representaban a la minoría alemana en la política parlamentaria checoslovaca desde 1919. Obtuvo el 80 % de

los votos emitidos el 22 de mayo y convirtió la victoria en exigencias inmediatas que, de hecho, habrían expulsado a todos los funcionarios civiles y policías checoslovacos de los Sudetes y desmembrado el Estado existente. Pero al igual que el ultimátum enviado por Austria a Serbia en 1914, las exigencias pretendían ser inaceptables, puesto que Hitler no esperaba más que una excusa para invadir Checoslovaquia.

Ante la nueva situación, Chamberlain advirtió a los franceses que su aliado checoslovaco tendría que hacer las concesiones que fueran necesarias con el fin de satisfacer las exigencias del señor Hitler. Después envió a un amigo personal, lord Runciman, para que actuara como mediador y diera de facto la independencia a los alemanes de los Sudetes, con la pretensión de evitar la guerra. Pero Hitler quería una victoria militar y Henlein tenía órdenes de no aceptar ningún compromiso que los checoslovacos ofrecieran. Después de que le hubieran rechazado tres borradores de propuestas, el negociador checo —en presencia de lord Runciman— puso al descubierto el objetivo nazi: entregó una hoja de papel en blanco, firmada, en la cual el pequeño führer Henlein se negó a escribir nada.

Runciman hubo de admitir el fracaso de una «mediación» que había durado un mes. Era la semana del Congreso anual del Partido Nazi en Nuremberg. En el podio, ante la multitud de tropas de asalto y de unidades de las SS, Hitler aulló sus fieras denuncias sobre las intolerables provocaciones de los checos. Simultáneamente los seguidores de Henlein organizaron disturbios en los Sudetes. Checoslovaquia decretó la ley marcial y Henlein huyó a Alemania. Durante unos días pareció que David había desafiado con éxito a Goliat. Pero el 15 de septiembre el primer ministro Chamberlain voló a Berchtesgaden para encontrarse con el Führer —según le resultaba más cómodo al último—, dispuesto a aceptar un mapa en el cual las zonas limítrofes habitadas por alemanes, junto con el mejor sistema de fortificación de la Europa continental, serían anexadas a Alemania. El 22 de septiembre, Chamberlain voló a Godesberg con la intención de firmar los protocolos. Pero se encontró con que el señor Hitler había hecho un nuevo mapa, que incluía muchas zonas indiscutiblemente checas. El indignado primer ministro se sintió traicionado e informó al gobierno checoslovaco de que no se

opondría a la movilización, movilización que se decretó al día siguiente.

Sin embargo, nadie —excepto Hitler— quería la guerra. Los atemorizados gobiernos de Italia y Francia recurrieron a sus buenos oficios para calmar al dictador alemán, hasta el punto de que aceptó una conferencia de las cuatro potencias, que se reuniría el 28 de septiembre en Munich. Los soviéticos —que no habían sido consultados— aseguraron a Checoslovaquia que harían honor al tratado de defensa mutua. Para los acosados checos, el valor de esa promesa era dudoso porque ni Polonia ni Rumanía estaban dispuestas a permitir que tropas soviéticas cruzaran su territorio para poder llegar a Checoslovaquia.

Entre el 28 y el 30 de septiembre Gran Bretaña y Francia obligaron en Munich a Checoslovaquia —que ni siquiera estuvo presente en la mesa de negociaciones— a ceder toda la zona de los Sudetes, como quería Hitler. El único Estado democrático que quedaba en Europa central fue desmembrado con el consentimiento de las potencias democráticas occidentales, en nombre de exagerados y falsos agravios étnicos. La moral del gobierno y del ejército checoslovaco se quebró. Cientos de alemanes antinazis de los Sudetes huyeron a Praga. Occidente había celebrado que Checoslovaquia hubiera hecho frente a Hitler con las movilizaciones parciales del 24 de mayo y 24 de septiembre. Pero en Munich sacrificaron a ese mismo valeroso pueblo para apaciguar a Hitler, en vez de reforzar la seguridad colectiva contra sus agresiones llegando a un entendimiento con la Unión Soviética.

Nunca han estado más claras las intenciones de un agresor ni las especulaciones equivocadas de las potenciales víctimas que en la crisis checoslovaca de 1938. Todo el mundo, menos Chamberlain, se dio cuenta de la oportunidad que se le ofrecía a Hitler de apretar más y más las tuercas con sus aterradoras amenazas. Pero Chamberlain era el primer ministro de la más poderosa de las potencias democráticas, y tanto la opinión pública francesa como la británica estaban tan atemorizadas con la posibilidad de una guerra generalizada, que celebraron los resultados de su gestión diplomática. El pueblo alemán también estaba asustado y un sector de los militares consideró la posibilidad de dar un golpe contra Hitler si occidente se ponía firme. Pero

Hitler jugó audazmente con las divisiones internas entre sus opositores y les ganó.

Hay que reconocer que la propaganda nazi entre los años 1935 y 1938 había caído en terreno abonado. El partido nazi dirigido por Henlein —en elecciones libres— suplantó por completo a los partidos parlamentarios alemanes de los Sudetes como la «voz» de la minoría alemana. Cualquier error diplomático o psicológico del funcionariado civil checoslovaco en su trato con la población de los Sudetes desde 1919 fue exagerado con mucha habilidad. Al mismo tiempo, a mediados de los años treinta, las numerosas quejas presentadas ante la Liga de las Naciones en favor de las minorías étnicas de toda Europa central habían predisposto a muchos políticos occidentales a creer que los Estados multinacionales no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en paz.

El Pacto de Munich quebró también la moral de la República española porque puso en evidencia que las potencias democráticas no se opondrían ni siquiera a que los nazis destruyeran directamente a una nación soberana y, mucho menos, a la intervención limitada que venían practicando desde agosto de 1936. Los líderes franceses no se habían hecho ilusiones con el Pacto de Munich ni siquiera en el momento de firmarlo. En cuestión de pocas semanas también Chamberlain estaba del todo decepcionado con el señor Hitler. Gran Bretaña y, en menor grado, Francia continuaron sus programas de rearme a fines de 1938. En marzo de 1939 Hitler ocupó todo el territorio de Checoslovaquia y estableció un gobierno títere eslovaco en la zona eslovaca. De ese modo demostró el absoluto desprecio que sentía por los solemnes acuerdos firmados por él seis meses antes. Ese mismo mes, el general Franco completó su conquista de la España republicana.

Hitler dedicó entonces su perversa oratoria a Polonia y denunció los intolerables sufrimientos de la población mayoritariamente alemana de la ciudad de Dantzig. Incluso Chamberlain dudó de que el apaciguamiento pudiera volver a funcionar. Durante los meses de primavera y verano, los diplomáticos británicos, franceses y soviéticos llevaron adelante conversaciones con el objeto de llegar a un acuerdo pensando, al fin, en la seguridad colectiva. Pero por la época de Munich —y probablemente antes—, Stalin había tomado conciencia de que uno de los objeti-

vos no reconocidos de la política de apaciguamiento era darle a Hitler la señal de que podía atacar la Unión Soviética sin molestar en exceso el sueño de los estadistas occidentales. Era una simple cuestión de sentido común sondear a los alemanes para saber si dos supuestos enemigos ideológicamente irreconciliables podrían encontrar la manera de hacer acuerdos mutuos ventajosos para ambos.

En toda la confrontación entre fascismo, comunismo y democracia, el fascismo había sido siempre el agresor. Desde 1917 hasta 1934 los comunistas habían volcado su rencor contra la democracia capitalista y considerado el fascismo una mera «última etapa» del capitalismo. La consolidación de la dictadura de Hitler, el heroísmo de los obreros vieneses en febrero de 1934 y de los mineros asturianos en octubre del mismo año hicieron que revisaran sus previsiones de futuro. Entretanto, Mussolini había sido sustituido por Hitler como el más poderoso de los líderes fascistas. Los dos países —Italia y Alemania— estuvieron sin duda alguna tanteando la voluntad de las potencias occidentales para resistir la agresión durante las crisis de Etiopía, España y Checoslovaquia.

En las democracias y, en especial, en Gran Bretaña, los gobiernos, los banqueros y los empresarios más influyentes eran por supuesto mucho más anticomunistas que antifascistas. En general las clases medias estaban muy divididas en lo que se refería a la propaganda fascista y comunista. La clase obrera y los intelectuales eran decididamente antifascistas y se inclinaban por dar a la Unión Soviética el beneficio de la duda tanto en política interna como internacional. Consideraban que el régimen nazi era una vuelta a la Edad Media (calificando así de malévolos a numerosos príncipes, cuyos regímenes no habían sido ni remotamente tan brutales como el de Hitler).

Las sangrientas purgas de Stalin y el creciente dominio del Partido Comunista en la España republicana habían generado en todas partes dudas inevitables sobre las intenciones de los comunistas. Al mismo tiempo era cada vez más evidente que las potencias fascistas sólo podían ser contenidas si había un acuerdo básico entre soviéticos y occidentales en lo que concernía a detener la agresión fascista. En general la izquierda democrática prefería la cooperación con los soviéticos; la derecha prefería

apaciguar a Hitler, con la esperanza de que apuntara sus armas hacia el este. A fines de 1938, los acontecimientos de España y Checoslovaquia parecían consagrar la victoria de los fascistas sin que les hubiera costado mayor derramamiento de sangre (en España hubo algunos miles de bajas italianas y alemanas).

Desgraciadamente también es verdad que, aunque las potencias occidentales hubieran tenido líderes menos proclives a apaciguar a los dictadores fascistas, las tácticas políticas de fascistas y comunistas ponían a los políticos democráticos ante un dilema sin resolver. ¿Cómo podían las sociedades constitucionales democráticas protegerse de movimientos que utilizaban técnicas constitucionales para destruir la libertad? La democracia es en gran parte cuestión de gobernar dialogando. Puede tolerar un considerable grado de estupidez y corrupción, pero su supervivencia depende siempre de la predominante honestidad y de las predominantemente decentes intenciones de quienes están en el poder.

Mussolini consolidó su dictadura de manera tan gradual, que el pueblo italiano no habría tenido nunca la menor ocasión de detenerlo si hubiera querido hacerlo. Hitler anunció de antemano que no habría más elecciones después de las de marzo de 1933, pero ya se había hecho legalmente con el poder cuando lo dijo. Los partidos comunistas de la época de los frentes populares sabían muy bien que eran partidos minoritarios pero, de alguna manera, se convencieron a sí mismos de que eran una vanguardia sabia y benévola. Pudieron haber creído de buena fe que conseguirían convencer a sus socios pero, con frecuencia, manipularon o simplemente pasaron por encima de los deseos expresados de forma democrática por los otros partidos de los frentes populares. Y nunca reconocieron el hecho obvio de que sus políticas estaban determinadas por la «línea» marcada por Moscú.

Por lo tanto, el fracaso de las democracias para atajar las agresiones internacionales del fascismo no fue sólo un fracaso de entendimiento, temple, lentitud en la recuperación económica o lentitud en el rearme. Fue también un dilema político y técnico, es decir, el de cómo vérselas con partidos que reclamaban todos los derechos de la democracia, con el propósito de destruirla. Fue el problema de los años treinta y también el que tuvieron que enfrentar después de la victoria aliada en la segunda guerra mundial. Y hoy sigue siendo un problema potencial.

CAPÍTULO 8

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 1939-1945

A fines de marzo de 1939 Hitler había completado la destrucción de Checoslovaquia. Su aliado menor, el general Franco, había completado su victoria sobre la República española con la ocupación de Madrid. Las tropas italianas y alemanas podían ser repatriadas para emplearlas en otras aventuras fascistas. El 7 de abril Mussolini invadió Albania sin informar a Hitler (que había ocupado Praga el 15 de marzo sin notificarlo a Mussolini).

El 31 de marzo, por su parte, Gran Bretaña ofreció garantías formales a Polonia. Además, en las semanas siguientes el gobierno de Chamberlain decretó, por primera vez en la historia británica, el reclutamiento en tiempos de paz y también ofreció garantías a Rumanía y Grecia. El 3 de mayo Stalin sustituyó al ministro de Relaciones Exteriores Maxim Litvínov que había sido portavoz de la cooperación con la Liga de las Naciones y, en ese momento, de la seguridad colectiva. Su sucesor Viacheslav Molótov era uno de los pocos «viejos bolcheviques» verdaderamente hábiles, a quien Stalin había exceptuado de las purgas de 1936-1938. En el transcurso del verano Francia y Alemania reforzaron sus guarniciones, dotando de personal a sus fuertes de las líneas defensivas, las llamadas líneas Maginot y Sigfrido.

No cabía duda de que, si bien no se habían repudiado abiertamente ni la política de apaciguamiento ni la de la seguridad colectiva, ninguna de las dos eran ya las líneas maestras de la política de las potencias occidentales ni de la Unión Soviética respectivamente. Hitler estaba, a su vez, listo para provocar la